



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/066/2025

TIPO DE JUICIO: JUICIO DE NULIDAD.

EXPEDIENTE: TJA/5ªSERA/066/2025.

PARTE ACTORA: [REDACTED]

AUTORIDAD DEMANDADA:
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS.

MAGISTRADO: JOAQUÍN ROQUE
GONZÁLEZ CEREZO.

**SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA:** ANA MARÍA ROMERO
CAJIGAL.

Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de marzo de dos mil
veintiséis.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

SENTENCIA que emite el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos en el expediente
TJA/5ªSERA/066/2025, del juicio interpuesto por [REDACTED]
[REDACTED] en contra del **Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos**; en
donde se resolvió que son **fundadas** las razones de



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

II.- La omisión de pago de la prestación consistente en una compensación por riesgo del servicio, que conforme el artículo 29 de la **LSEGSOCSPPEM**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

III.- La omisión de pago de la prestación consistente en ayuda para pasajes y/o transporte conforme el artículo de la **LSEGSOCSPPEM**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

IV.- La omisión de pago de la prestación consistente en ayuda para alimentación, que conforme el artículo 34 de la **LSEGSOCSPPEM**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.¹

Autoridad

Director General de Recursos

¹ Actos precisados en el cuerpo de la presente sentencia.

demandada: Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.²

LJUSTICIAADMVAEM: *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.*³

LORGTJAEMO: *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*⁴.

CPROCIVILEM: *Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.*

LSSPEM: *Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos*

LSEGSOCSPPEM: *Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.*

² De nominación correcta de la autoridad demandada de conformidad a la contestación de demanda a fojas 43 de este expediente.

³ Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

⁴ Idem.



LSERCIVILEM: *Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.*

Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1.- Previo a subsanar la prevención de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, mediante acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil veinticinco, se admitió el juicio promovido por la **parte actora**, en contra de la **autoridad demandada**; en la que señaló originalmente como **actos impugnados**:

*"I.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en vales de despensa conforme el artículo 28 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.*

*II.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en una compensación por riesgo del servicio, que conforme el artículo 29 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos;*

*III.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en AYUDA PARA PASAJES Y/O TRANSPORTE conforme el artículo de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y como lo establece el numeral 35 inciso G, del Reglamento del Servicio Profesional del Carrera Policial para el Municipio de Jiutepec, Morelos;*

*IV.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en AYUDA PARA ALIMENTACIÓN, que conforme el artículo 34 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos." (Sic)*

En consecuencia, se formó el expediente respectivo y se registró en el Libro de Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se ordenó emplazar a la **autoridad demandada** para que dentro del término de diez días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de ley respectivo.

2.- Emplazada que fue la **autoridad demandada**, por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil veinticinco, se le tuvo dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra. Con la contestación de la demanda, se le dio vista a la **parte actora** por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y se le anunció su derecho de ampliar la demanda.

3.- Por acuerdo de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, se tuvo por ejercido el derecho a la **parte actora** para dar contestación a la vista descrita en el párrafo que precede.

4.- Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veinticinco, se declaró precluido el derecho de la **parte actora** para interponer ampliación de demandada en términos del artículo 41 de la **LJUSTICIAADMVAEM**. En ese mismo auto abrió el periodo probatorio por el termino de cinco días común para las partes.

5.- Previa certificación, mediante auto de cinco de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo constar que ninguna de las **partes** ofreció ni ratificó sus pruebas; por lo que se les



declaró precluido su derecho para hacerlo; sin embargo, para mejor proveer al momento de resolver, se admitieron las pruebas documentales exhibidas en autos. Por último, en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia de Ley.

6.- El diez de octubre del dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la incomparecencia de las partes, que no había pendiente de resolver incidente o recurso alguno, procediendo al desahogo de las pruebas documentales a las que se les daría el valor probatorio al momento de resolver, al no haber prueba pendiente por desahogar se cerró el periodo probatorio y se ordenó continuar con la etapa de alegatos, en la que se tuvo por perdido el derecho de ambas partes; citándose a las partes para oír sentencia.

4. COMPETENCIA

Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 116 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*, 1, 3 de la **LJUSTICIAADMVAEM**; 1, 3, IX, 4 fracción III, 16 y 18, apartado B), fracción II, incisos a), h), n) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO**; 105 de la **LSSPEM**.

Considerando que los actos impugnados que hace valer la actora consisten en una serie de presuntas omisiones imputadas a la **autoridad demandada**.

5. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

La **parte actora** señaló como actos impugnados en el presente juicio⁵, los siguientes:

*I.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en vales de despensa conforme el artículo 28 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.*

*II.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en una compensación por riesgo del servicio, que conforme el artículo 29 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos;*

*III.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en AYUDA PARA PASAJES Y/O TRANSPORTE conforme el artículo de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y como lo establece el numeral 35 inciso G, del Reglamento del Servicio Profesional del Carrera Policial para el Municipio de Jiutepec, Morelos;*

*IV.- La **OMISIÓN** de no pagarme la prestación consistente en AYUDA PARA ALIMENTACIÓN, que conforme el artículo 34 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.” (Sic)*

Aún y cuando pudieran comprenderse las omisiones que está haciendo valer la actora, de su lectura se observa que es redundante porque está usando una doble negación “La **OMISIÓN** de no pagarme...” (Sic). Más si se considera que, una omisión es el incumplimiento de un deber, en este caso, el deber de pagar (omisión de pago). Asimismo, en la omisión con numeral III, invoca un fundamento del *Reglamento del*

⁵ De conformidad a la admisión de demanda de fecha diez de marzo de dos mil veinticinco, (foja 29 reverso del presente asunto).



Servicio Profesional del Carrera Policial para el Municipio de Jiutepec, Morelos, que evidentemente se trata de un error, al ser una norma inaplicable al actor, ya que de autos se desprende que cuando estuvo activo fue policía adscrito al Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y no al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

Por otra parte, de sus pretensiones se observa que reclama esas omisiones de pago desde el mes de enero del año dos mil quince, es decir, desde que estaba en funciones y en su calidad de pensionada.

Por lo anterior, se aclara que se tendrán como actos impugnados:

I.- La omisión de pago de la prestación consistente en vales de despensa conforme el artículo 28 de la **LSEGSOCSP**EM, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

II.- La omisión de pago de la prestación consistente en una compensación por riesgo del servicio, que conforme el artículo 29 de la **LSEGSOCSP**EM; activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

III.- La omisión de pago de la prestación consistente en ayuda para pasajes y/o transporte conforme el artículo de la **LSEGSOCSP**EM, como activa a partir de enero

de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez; y

IV.- La omisión de pago de la prestación consistente en ayuda para alimentación, que conforme el artículo 34 de la **LSEGSOCSPEN**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

Sirve de orientación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente:

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.⁶

Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, **a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa**

⁶ Época: Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32 Amparo en revisión 546/95. [REDACTED] 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame; Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame; Amparo en revisión 507/96. [REDACTED] 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia; Amparo en revisión 3051/97. [REDACTED] 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez; Amparo en revisión 1465/96. [REDACTED] 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez; El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

En tal sentido y como se aprecia los actos que se impugnan se tratan de omisiones; por tanto, su existencia será analizada en el fondo del asunto en líneas posteriores.

6. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia, por ser de orden público, deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 párrafo último⁷ de la **LJUSTICIAADMVAEM**, en relación con lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta potestad en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de la *Ley de Amparo*.

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.⁸

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que, si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es

⁷ **Artículo 37.** El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

...
El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio respectivo.

⁸ Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.

la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

Es menester señalar que, si bien los artículos 17 *Constitucional*, 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la *Convención Americana sobre Derecho Humanos*, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el derecho a ésta última y contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí viola esos derechos.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y, decidir sobre la cuestión debatida.

Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la **LJUSTICIAADMVAEM** tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios



que lo regulen, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues la obligación de garantizar ese recurso efectivo, no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo.

La autoridad demandada al momento de producir contestación al juicio hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 37⁹, así como la fracción 38 fracción II¹⁰, en relación con el artículo 40 fracción I¹¹, todos de la **LJUSTICIAADMVAEM**; señalando que la actora debió de hacer valer su derecho dentro del término del quince días hábiles a partir del día hábil siguiente en que haya sido notificado o que haya tenido conocimiento o sabedor de los mismos.

⁹ Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

...
X. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley;

...
¹⁰ **Artículo 38.** Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Por desistimiento del demandante o solicitante. Para que proceda el desistimiento deberá ratificarse ante la Sala del Tribunal;
II. Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere esta Ley;

¹¹ **Artículo 40.** La demanda deberá presentarse:

I. Dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que le haya sido notificado al afectado el acto o resolución impugnados, o haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor de los mismos cuando no exista notificación legalmente hecha.

Sobre este tema se destaca que, no se configura la causal que invoca, por tratarse de omisiones, la cuales son de tracto sucesivo, es decir se siguen dando momento a momento; siendo distinto que opere la prescripción respecto a los pagos contra los cuales no se haya promovido el juicio en tiempo, situación que en su caso se analizara en líneas subsecuentes, esto se apoya en el siguiente criterio:

REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CUANDO LA OMISIÓN DE SU PAGO SEA DE TRACTO SUCESIVO (MES CON MES), NO DEBEN CONSIDERARSE COMO ACTOS CONSENTIDOS LOS PERIODOS IMPUGNADOS FUERA DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, SIEMPRE QUE NO HAYA PRESCRITO EL DERECHO A PERCIBIRLOS.¹²

Hechos: En el juicio contencioso administrativo, un policía impugnó la falta de pago de sus haberes correspondientes a diversos meses, el cual fue sobreseído respecto a algunos de éstos, resolución que fue confirmada en apelación por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al considerar que son actos consentidos tácitamente, ya que no se impugnaron en tiempo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al ser la omisión reclamada de tracto sucesivo, no se tiene una fecha cierta para su conocimiento; por ello, **no deben considerarse como actos consentidos los meses impugnados fuera del plazo de 15 días; de ahí que deben analizarse siempre y cuando no haya prescrito el derecho a percibir su pago** (un año).

Justificación: Lo anterior, porque al ser periódica la omisión de pago de las remuneraciones, afecta al demandante mes con mes, entonces, es incorrecto sobreseer por todos los periodos impugnados, pues la falta de la autoridad constituye una violación a los derechos del quejoso constante, **lo cual no puede ser considerado como un acto consentido tácitamente**, bajo el argumento de que no se promovió en tiempo la demanda conforme al artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa.

¹² Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2027925, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, tesis: I.11o.A.47 A (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, página 6163, Tipo: Aislada.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 702/2022. 4 de julio de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales. Esta tesis se publicó el viernes 05 de enero de 2024 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



Además, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, como los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones y demás remuneraciones, **prescribe en un año contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a percibir las, por lo que si no prescribe la acción respecto a algún periodo, se debe estudiar y resolver la legalidad de su falta de pago.**

(Lo resaltado es añadido)

Una vez realizado lo anterior y tras examinar las evidencias que componen el expediente, este **Tribunal** no identifica ninguna causa de improcedencia que justifique el sobreseimiento del juicio. Por lo tanto, se procede a continuación al estudio sustantivo de la cuestión planteada.

7. ESTUDIO DE FONDO

7.1 Planteamiento del caso.

En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, se procede a hacer la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente juicio.

Así tenemos que, la **parte actora** señaló como actos reclamados en su demanda los que fueron descritos en el capítulo de *"Antecedentes del caso"*, mismos que fueron precisados en líneas anteriores; los que se tienen como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias; de los cuales está en controversia su ilegalidad o legalidad. Así como la procedencia o improcedencia de sus pretensiones, mismas que están íntimamente ligadas con los actos impugnados.

En el entendido que el análisis de la legalidad o ilegalidad del **acto impugnado** se efectuará bajo la óptica de las razones de impugnación que hizo valer la demandante, atendiendo la causa de pedir y la suplencia de la queja en términos del siguiente criterio:

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.¹³

El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de

¹³ Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2008449; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común, Administrativa; Tesis: I.3o.A. J/1 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2394; Tipo: Jurisprudencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 904/2013. [REDACTED] 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Magdalena Selene Guerrero Núñez.

Amparo directo 854/2013. [REDACTED] 26 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Amparo directo 1085/2013. [REDACTED] 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Magdalena Selene Guerrero Núñez.

Amparo directo 1088/2013. [REDACTED] 12 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Amparo directo 1095/2013. 9 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. XCV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.", publicada el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 1106.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban.

7.2 Carga probatoria

Como se advierte de los actos impugnados precisados, se acusa a la **autoridad demandada** de haber incurrido en diversas omisiones relativas a la integración de su pensión por invalidez; lo cual implica un no hacer o abstención de dicha autoridad, en detrimento de los derechos de la actora; siempre que exista una norma que la conmine.

De la lectura de la demanda se colige que la actora aduce que reclama prestaciones derivadas de **LSEGSOCSPPEM**; en tal orden el estudio consistirá, en resolver si dichas prestaciones están contenidas en esa norma, si es coercitivo su cumplimiento y de ser así; la carga de la prueba de haber dado cumplimiento a las mismas, corresponde a la demandada.

Esto es así ya que la carga probatoria tiene una relación directa con la naturaleza del acto imputado; así

tenemos que para que se configure una omisión es imprescindible que exista un deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.

La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. Sirve de orientación la siguiente tesis aislada:

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS. ¹⁴

Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. **La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí.** Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, **otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones.** De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías.

(Lo resaltado es añadido)

Para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la

¹⁴ Amparo directo en revisión 978/2007. [REDACTED], 4 de julio de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Registro digital: 171435. Tipo de tesis: Aislada. Materias(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Tesis: 1a. CXC/2007. Página: 386.



autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido; es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho y no acata la facultad normativa. Es aplicable la siguiente tesis aislada:

ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.¹⁵

Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado

¹⁵ Amparo en revisión 1241/97. [REDACTED] 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. Registro digital: 196080, Tipo de tesis: Aislada. Materias(s): Común, Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo VII, Junio de 1998- Tesis: 1a. XXIV/98. Página: 5.

sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.

(Lo resaltado no es de origen)

7.3 Pruebas

A ninguna de las partes se les tuvo por ofrecidas y ratificadas sus pruebas; sin embargo, en términos del artículo 53¹⁶ de la **LJUSTICIAADMVAEM**, para la mejor decisión del asunto se admitieron las documentales que fueron exhibidas en autos y admitida para mejor proveer y que son las siguientes:

1. **LA DOCUMENTAL.** - Consistente en impresión del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" constantes de tres fojas correspondiente a la página 124 a la 127.¹⁷
2. **LA DOCUMENTAL.** – Consistente en copias certificadas de ocho fojas pertenecientes al sistema de nómina de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.¹⁸
3. **LA DOCUMENTAL.** – Consistente en copia certificadas de ciento treinta y cinco fojas pertenecientes al expediente personal de la demandante en la Dirección General de Recursos

¹⁶ **Artículo 53.** Las Salas podrán acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas que estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus intereses; asimismo, podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos notorios no requieren prueba.

¹⁷ Fojas 19 a la 21 del expediente principal.

¹⁸ Integradas en el anexo denominado Cuadernillo de Datos Personales.

Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.¹⁹

Documentales que se tienen por auténticas al no haber sido objeto de impugnación en los términos establecidos en el artículo 59²⁰ y 60²¹ de la **LJUSTICIAADMVAEM**; y en lo dispuesto por el artículo 491²² del **CPROCIVILEM**, aplicable

¹⁹ Integradas en el anexo denominado Cuadernillo de Datos Personales.

²⁰ **Artículo 59.** Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los documentos ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando hubiesen sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los autos.

²¹ **Artículo 60.** Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la impugnación se tramitará en la vía incidental observándose en su caso lo siguiente:

- I. Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, sino que se deberá, fundamentar las causas de impugnación;
 - II. En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las pruebas relacionadas con la misma;
 - III. Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento impugnado, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda; al desahogar esta vista, el oferente deberá ofrecer a su vez, las pruebas que se relacionen con la impugnación;
 - IV. Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto probatorio alguno;
 - V. Desahogada la vista a que se refiere la fracción III de este Artículo, las Salas citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las partes, los peritos y testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o testimonial;
 - VI. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las declaraciones y dictámenes respectivos y se dictará resolución;
 - VII. La Sala tendrá la más amplia libertad para la apreciación de las pruebas en el incidente de impugnación, basándose en los principios generales del derecho, la lógica y la experiencia, y
 - VIII. Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, éste se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes.
- La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno.

²² **ARTICULO 491.-** Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde.

supletoriamente a la ley antes mencionada de conformidad a su numeral 7²³, haciendo prueba plena.

7.4 Razones de impugnación.

Los motivos de impugnación de la **parte actora** se encuentran visibles de las fojas 08 a la 17 del asunto que se resuelve, los cuales se tienen aquí como íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen; sin que esto cause perjuicio o afecte a la defensa de la justiciable, pues el hecho de no transcribirlas en el presente fallo no significa que este **Tribunal** esté imposibilitado para el estudio de las mismas, cuestión que no implica violación a precepto alguno de la **parte actora**, lo cual tiene sustento en la siguiente jurisprudencia:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. ²⁴

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

²³ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

²⁴ SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. JURISPRUDENCIA de la Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599.



La actora en su escrito de demanda refiere substancialmente lo siguiente:

1. Que al haberse promulgado la **LSEGSOCSPÉM**, de conformidad a sus artículos primero, segundo, séptimo, transitorios empezó a transcurrir un periodo de vacatio legis, en el que las autoridades demandadas no tenían la obligación de realizar el pago de prestaciones complementarias de seguridad social, pero si la obligación con la correspondiente oportunidad de un año, de realizar las adecuaciones presupuestales necesarias, tal y como lo manda la ley, para encontrarse en condiciones de que en el primero de enero del año siguiente, pudiesen dar cumplimiento con las obligaciones que les impuso la norma, realizando el otorgamiento de las prestaciones que reclama.

Estima que son imprescriptibles los derechos complementarios de seguridad social como lo son la compensación por riesgo en el servicio, ayuda para pasajes y ayuda para alimentación a partir del primero de enero del año dos mil quince y la prestación de Despensa Familiar; lo anterior en atención a que, la única Ley, que establece la figura legal de la prescripción es la **LSSPEM**, que en sus numerales 200 y 201 especifica el plazo en el que prescriben las acciones derivadas de la relación administrativa de los elementos de las instituciones de seguridad pública que surjan de dicha Ley; así como las acciones concernientes al nombramiento a los cargos y las resoluciones que den por terminada la relación administrativa correspondiente.

Sin embargo, a su consideración dicha prescripción, no opera, respecto de los derechos complementarios de seguridad que reclama por dos circunstancias:

La primera es porque la **LSSPEM**, según lo que establece en su artículo 1º, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece las competencias y bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, y entre éstos con la Federación, los Estados de la República y el Distrito Federal. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio estatal, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 115 fracciones III Inciso h) y VII de la *Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos*, y 114 Bis fracción VIII de la *Constitución Política y Soberano de Morelos. Estado Libre*.

La segunda, es que, la propia **LSSPEM**, en su capítulo II, el cual se denominó "*DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECONOCIMIENTOS*", específicamente en los artículos 105 y 106, impone al Poder Ejecutivo del Estado, la obligación de emitir la ley correspondiente que regule el sistema complementario de seguridad social de los sujetos de ley; la cual, ya se ha referido, es la **LSEGSOCSPM**; legislación que establece y regula el referido sistema complementario de seguridad social de los elementos policiales y sus beneficiarios; en la **cual no se encuentra establecida la figura legal de prescripción**.



Solicita que este Tribunal realice control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad sobre los artículos 28, 29, 31 y 34 de la **LSEGSOCSP**; dispositivos legales que considera contrarios a los derechos humanos reconocidos por nuestra *Carta Magna* y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y que, en su caso, sean aplicados para resolver el presente asunto, en los siguientes términos:

A). COMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS PARA CONOCER Y RESOLVER EL PRESENTE ASUNTO

Que este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción V de la *Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos*; 109 Bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*: 1, 16, 18 apartado B fracción II incisos a y h de la **LORGTJAEMO**; 1, 3, 7 85, 86 y 89 de la **LJUSTICIAADMVAEM**.

B). DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDOS, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR Y EL AGRAVIO QUE PRODUCE.

B.1.- DERECHOS HUMANOS INFRINGIDOS: Derecho humano a la seguridad social, derecho humano de igualdad ante la ley, principio de mayor beneficio o pro homine, principio de interpretación conforme a la *Constitución*, principio de progresividad de los derechos humanos y derecho humano de seguridad jurídica; derechos que se encuentran reconocidos

en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* en los numerales 1, 4, 14 y 123 apartado B fracción XIII.

B.2.- NORMA GENERAL A CONTRASTAR: Artículos 2, 3 fracción I, 28, 29, 31 y 34 de la **LSEGSOCSPEN**.

B.3.- AGRAVIOS:

Los artículos 2, 3 fracción I, 28, 29, 31 y 34 de la **LSEGSOCSPEN**, establecen que:

Artículo *2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia siguientes:

I.- Dentro de las Instituciones Policiales: Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial, los elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, así como los encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolescentes como de adultos. Municipales.- El Secretario de Seguridad Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los elementos policiacos y operativos de Seguridad Pública; y
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Fiscal General, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos.

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- Sujetos de la Ley: Los miembros descritos en el artículo 2 de la presente Ley;

Artículo 29.- Se podrá conferir a los sujetos de la Ley una compensación por el riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

Artículo 31. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una ayuda para pasajes, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos.

Artículo 34.- Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 *Constitucional*, debe precisarse que el principio de igualdad, en la ley se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho.

Lo anterior significa que toda desigualdad de trato se materializa si se produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva como en el caso de los preceptos sobre los cuales se solicita el control; de lo anterior se colige que, a iguales supuestos de hecho corresponden similares situaciones jurídicas, pues en este sentido el legislador tiene prohibición para establecer en la ley una desigualdad de trato que resulta artificiosa o injustificada, como se actualiza en el caso en particular, ya que, los artículos 29, 31 y 34 de la **LSEGSOCSP**, concede a las autoridades obligadas la libertad de otorgar el régimen complementario de seguridad social, de manera optativa, facultativa, potestativa y discrecional, bajo su libre criterio, sin que exista un estándar de medición de procedencia, ni un marco de motivación ni fundamentación, para resolver los supuestos en lo que habrán de conceder las prestaciones consistentes en el otorgamiento de la compensación por riesgo de servicio, la ayuda para pasajes y la ayuda para alimentación; por lo que impone, de manera inconstitucional, la disminución, menoscabo y negación de los derechos enunciados, sin que exista razonabilidad ni proporcionalidad en la restricción de las

prerrogativas estipuladas en la ley, ni en el trato diferenciado establecido, además de que sustenta el derecho de percibir las en una categoría sospechosa al condicionar su otorgamiento en la simple voluntad de la autoridad obligada, circunstancia que no supera el examen de escrutinio estricto de constitucionalidad a la luz del principio de legalidad, seguridad, certeza jurídica e igualdad ante la ley.

Fundamenta lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ERICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 10. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).²⁵

La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad artículo 1o. de la Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Por ello siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos

²⁵ Registro digital: 169877, Instanciar Primera Sala, Novena Época. Materia(s): Constitucional Tesis: la./J. 37/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 175 Tipo: Jurisprudencia por reiteración.

enumerados (origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos casos Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad.

Por tanto, abunda que, para estar en concordancia con el derecho humano de igualdad, debe atenderse a las consecuencias jurídicas que derivan de la ley, las que deben ser de tal manera proporcionadas con el fin de que ayuden a conseguir un trato igualitario.

Sigue diciendo que, dispositivos sobre los cuales se solicita se realice el control, transgreden las garantías de igualdad y de seguridad social, porque, como se dijo, el derecho constitucional de contar con un régimen de seguridad social, no puede estar sujeto a la voluntad de quien se encuentra obligado a proporcionarlo y menos si se adolece de motivos objetivos que justifique se disminuya el derecho de recibirlos, pues cualquier motivo, incluso oculto, arbitrario o injustificado que asuma la autoridad obligada, es suficiente para que sean suprimidos.

Reitera que, la procedencia del otorgamiento de las prestaciones enunciadas, dependen del libre albedrío de las municipales demandadas, ya que, los dispositivos que las rigen, dan, inconstitucionalmente, la facultad de elegir y

"2026, Año de Margarita Maaza Parada".

determinar, los casos, las condiciones y los sujetos de derecho, incluso entre iguales, que tienen derecho a recibirlas sin que exista justificación para ello, ya que la propia **LSEGSOCSP** en su artículo **segundo transitorio**, impone la obligación de realizar las previsiones presupuestales un año antes de que entraran en vigor, por lo que ni el pretexto de no contar con recursos económicos suficientes, justifica la supresión de derechos e indiscutiblemente se aparta de la esencia constitucional.

En esa virtud, aduce, atendiendo a que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la *Constitución Federal*, establece la obligación de proporcionar a los elementos policiales un régimen de seguridad social, lo que necesariamente implica su protección y la de su familia, tendr a que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que las prestaciones que lo conforman sólo son garantizables a juicio de la autoridad que debe darlos, son motivos realmente justificados para restringir los derechos de los elemento de los cuerpos de seguridad en el Estado de Morelos.

Discurra que, en razón de lo expuesto y dado que, en el presente caso, el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado, ni de las exclusiones marcadas en los artículos a contrastar; debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y, por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social previstos en la *Constitución Federal*.



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Agrega que, a la luz del principio de interpretación más favorable de los derechos humanos; los artículos en cuestión al establecer una condición subjetiva que sujeta el otorgamiento de las prestaciones al ánimo de la autoridad que debe proporcionarlos: transgrede el derecho humano de seguridad jurídica, pues permea de incertidumbre su concesión, ya que no establece, de manera clara, los casos en los que habrán de darse, las condiciones a requisitar para ser acreedor, ni los supuestos en los que no es dable su entrega, creando una figura bajo estándares restrictivos, sin que exista una situación de causalidad que la fundamente, o al menos no se encuentra plasmada en ninguna parte de la ley: esto es así, ya que basa o supedita su otorgamiento de la pensión que aquí se reclama a circunstancias ajenas a los beneficiarios.

Hace valer que, es evidente, que los dispositivos legales sobre los cuales se solicita se aplique control difuso de la constitucionalidad; establecen una serie de categorías sospechosas en relación al merecimiento de las prestaciones y que tienen como única finalidad la de anular menoscabar el derecho de la persona, lo cual carece de razonabilidad pues provoca un trato diferenciado y una discriminación institucional al ser excluyente; invoca el siguiente criterio:

PETICIÓN DE CONTROL DIFUSO DE LA
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO DEL ARTÍCULO 41
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS.

Señala que los artículos 2 y 3 fracción I de la **LSEGSOCSP**, violentan el principio de certeza y seguridad jurídica, de interpretación conforme y pro persona así como el derecho humano de igualdad de la ley, por las siguientes razones:

Los derechos cuyo otorgamiento se reclaman en la presente instancia y que se encuentran previstos en los artículos 28, 29, 31 y 34 de la Ley que rige el fondo del presente asunto y 35 del *Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Emiliano Zapata* establecen, que serán otorgados a los sujetos de ley. (Sic)

Sostiene que, al respecto, los numerales 2 y 3 fracción I del referido cuerpo normativo, enuncian a las personas que son consideradas, precisamente sujetos de ley, excluyendo, al menos en su literalidad a las personas que reciben una prestación emanada de haberse desempeñado como elementos policiacos u operativos de una institución de seguridad pública municipal y que en la actualidad se encuentren recibiendo el beneficio de una pensión; por lo que, por omisión legislativa se excluye a las personas que se sitúan en dicho supuesto.

Agrega que, bajo una óptica de interpretación restrictiva o limitativa, pudiese considerarse que las personas que perciben una pensión, como es el caso del suscrito, no tienen derecho al otorgamiento del régimen complementario de seguridad social que observa la ley; sin embargo; de una interpretación integral del texto dispositivo y bajo la óptica de



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

la interpretación de conformidad con el bloque de regularidad constitucional y principio pro persona, se puede advertir que el artículo 24 segundo párrafo de la multirreferida **LSEGSOCSP**, expresamente establece que: Las pensiones se integraran por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo; por lo que resulta inconcuso que los derechos de seguridad social cuyo otorgamiento se demanda; deben formar parte o integrar la pensión por invalidez que percibo: por lo que su negación legal, violentaría sus derechos humanos de seguridad social, de certeza y seguridad jurídica e igualdad ante la ley y los principios de interpretación conforme establecidos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

C). LA NORMA SOBRE LA CUAL SE SOLICITA SE REALICE CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD, EN SU CASO, PODRÍA SER EMPLEADA EN LA SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO.

D). PUEDE EXISTIR UN PERJUICIO EVIDENTE CON LA APLICACIÓN DE LA NORMA SOBRE LA CUAL SE SOLICITA SE REALICE CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

Argumenta que lo anterior en virtud de que con su aplicación podría negarse, en contravención de la *Carta Magna* los beneficios de seguridad social, derechos humanos y principios constitucionales que le asisten.

B). No existe cosa juzgada en el presente asunto.

F). No existe jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que se reclama.

G).- No existen criterios vinculantes sobre la convencionalidad de la norma general en cuestión.

La anterior solicitud de control difuso de la constitucionalidad la realiza con fundamento en la siguiente tesis jurisprudencial:

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.²⁶

7.5 Contestación de la demanda

Cabe precisar que en la contestación de demanda la autoridad hizo valer argumentos relacionados con los incrementos anuales de la pensión de la actora; sin embargo, como se advierte de esta sentencia no está en controversia ese tema; por ende, no tiene caso hacer alusión a esas manifestaciones.

La **autoridad demandada**, al momento de producir contestación al juicio, respecto a los actos omisivos hechos valer señaló que:

²⁶ Registro digital: 2005057. Instancia: Tribunales Colegiados de circuito. Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.(VIII Región J/8 (100.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. pro 1. Diciembre de 2013, Tomo II, página 953. Tipo: Jurisprudencia.

Señala que, aun y cuando no estaba obligada a realizar los pagos a pensionados de ayuda para transporte, riesgos profesionales, apoyo escolar y ayuda para alimentos que señala la **LSEGSOCSP**, esto en razón de que, no tienen el carácter de permanentes u obligatorias de ser otorgadas en términos de los artículos 29, 31, 32 y 34, los cuales refieren en su contenido se podrá conferir, lo cual resulta ser una facultad potestativa de la autoridad y no así una obligación, así como tampoco, las prestaciones que reclama la actora se encuentran dentro de las previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del estado de Morelos, en términos de la **LSERCIVILEM**, las mismas son parte integral de su sueldo como jubilada.

7.7 Del marco legal de la demandada

Como ya indicó la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad.

Como se aprecia, la **autoridad demandada** rechazó el derecho de la actora a las reclamaciones que efectúa.

Asimismo en términos del artículo 11 fracción IV, VI, XXII y XIII²⁷ del **RADMINISTRACION**, se concluye que, a la

²⁷ **Artículo 11.** A la persona Titular de la Dirección General de Recursos Humanos le corresponden las atribuciones específicas siguientes:

I. Proponer a la Persona Titular de la Secretaría la política de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Centralizada, así como lineamientos y normativa inherente a la gestión del capital humano para su instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación;



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Dirección General de Recursos Humanos le corresponden entre otras, las siguientes atribuciones específicas: proponer a la Persona Titular de la Secretaría la **política de administración de los recursos humanos** de la Administración Pública Centralizada, así como lineamientos y normativa inherente a la gestión del capital humano para su instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación; administrar la plantilla de personal autorizada y el tabulador de sueldos de la Administración Pública Centralizada, conforme a la Normativa; desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar, verificar, supervisar y evaluar el sistema de pagos y prestaciones laborales de las personas servidoras públicas en activo, **de las percepciones de las personas jubiladas y pensionadas**, y de pagos de servicios personales y profesionales que así corresponda, efectuando el cálculo correspondiente, la comprobación de reintegros y las cantidades devengadas, como parte del mismo sistema;

IV. Administrar la plantilla de personal autorizada y el tabulador de sueldos de la Administración Pública Centralizada, conforme a la Normativa;

V. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar, verificar, supervisar y evaluar el sistema de pagos y prestaciones laborales de las personas servidoras públicas en activo, **de las percepciones de las personas jubiladas y pensionadas**, y de pagos de servicios personales y profesionales que así corresponda, efectuando el cálculo correspondiente, la comprobación de reintegros y las cantidades devengadas, como parte del mismo sistema; vigilando que se cumplan las obligaciones fiscales de seguridad social y cualquier otra aplicable, conforme a la Normativa y en coordinación con la Secretaría de Hacienda cuando así corresponda;

VII. Realizar la inclusión en las nóminas respectivas de las personas servidoras públicas en activo, personas jubiladas y pensionadas, en los términos de la Normativa;

XXIV. Coordinar e implementar las acciones necesarias para llevar a cabo la credencialización y la revisión de la supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas;

XXV. Efectuar las acciones necesarias que competan, para que sea otorgada la seguridad social a las personas servidoras públicas en activo, personas pensionadas y jubiladas de la Administración Pública Centralizada, cuando el caso así lo requiera, así como gestionar los recursos financieros ante la Secretaría correspondiente; y

vigilando que se cumplan las obligaciones fiscales de seguridad social y cualquier otra aplicable, conforme a la Normativa y en coordinación con la Secretaría de Hacienda cuando así corresponda; realizar la inclusión en las nóminas respectivas de las personas servidoras públicas en activo, personas **jubiladas y pensionadas**, en los términos de la Normativa; coordinar e implementar las acciones necesarias para llevar a cabo la credencialización y la revisión de la supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas; efectuar las acciones necesarias que competan, para que sea otorgada la seguridad social a las personas servidoras públicas en activo, personas **pensionadas y jubiladas** de la Administración Pública Centralizada, cuando el caso así lo requiera, así como gestionar los recursos financieros ante la Secretaría correspondiente.

En las relatadas consideraciones, y por las facultades que ejercen el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, es evidente que es a quien compete la responsabilidad de atender todo lo relacionado a las prestaciones que hayan sido pagadas al jubilado o aquellas que estén pendientes de cubrirse, por ende, su calidad exclusiva como autoridad responsable.

Por lo que existe un deber de la demandada Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el cual deriva de una facultad que las habilita y da competencia



para participar y realizar en su caso los pagos a la **parte actora** de las prestaciones que resulten procedentes en su calidad de pensionada.

Así tenemos que el acto de omisión implica una falta de acción por parte de la autoridad demandada, quien tiene un deber derivado de una facultad. Así, la carga de la prueba recae sobre ellas para demostrar que no han incurrido en los actos de omisión que les atribuye la **parte actora**.

7.8. Análisis de las omisiones

Este órgano jurisdiccional conforme al artículo 109 Bis, de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*, y el artículo 3, de la **LJUSTICIAADMVAEM**, está dotado de plena jurisdicción, es un órgano de control de la legalidad con potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos en armonía con las disposiciones legales que sean aplicables al caso concreto.

Por ese motivo las omisiones imputadas se analizarán conforme al ordenamiento legal que resulte aplicable.

7.8.1 Despensa o Despensa Familiar

La **parte actora** hizo valer lo siguiente:

I.- La omisión de pago de la prestación consistente en vales de despensa conforme el artículo 28 de la **LSEGSOCSPM**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

Las **autoridades demandadas** adujeron que era improcedente dicha integración, porque ya estaba incluida en su pago aún y cuando no era obligatoria.

La actora al momento de desahogar la vista que se le dio de la demanda señaló que, el monto que se le venía cubriendo era inferior al que marca la norma que regula dicha prestación.

Esta autoridad considera que es **fundado** el reclamo de la **parte actora**, como se explica a continuación:

En el periódico oficial [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] que en
sus artículo 2 y 3 dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- Se concede [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quien prestó sus servicios inicialmente en los Ayuntamientos de Jiutepec y Xochitepec, Morelos y finalmente en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de [REDACTED], adscrita a la Dirección General del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 2.- La pensión decretada lo es a razón del [REDACTED] de su último salario mensual percibido, **que debe sufragarse a partir del día siguiente a aquél en que quedó firme la determinación de la [REDACTED]**, de conformidad con el último párrafo del arábigo 18, fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública en vigor, debiendo ser cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones.

ARTÍCULO 3.- El monto de la pensión, se calcula tomando como base el criterio precisado en el artículo 2, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo vigente, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral décimo primero transitorio de

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, **integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley última referida** en el presente artículo.

(Lo resaltado es propio de esta autoridad)

Del que se hace constar que, a la **demandante** se le concedió pensión por invalidez con el cargo de [REDACTED], a un [REDACTED] de su último salario mensual percibido, mismo que debía integrarse por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo.

Es decir, la controversia de hecho y de derecho planteada por las partes ante el **Tribunal**, se trata de resolver si el pago de los la Despensa Familiar o Despensa que se le ha venido cubriendo a la actora se trata o no de una prestación que se debe integrar a la pensión por invalidez y en caso positivo si como se le ha venido pagado es la correcta, incluso como activa desde enero de dos mil quince.

La Despensa o Despensa Familiar en el caso de los elementos policiales encuentra su apoyo en los artículos 4 fracción III y 28 de la **LSEGSOCSP** que disponen:

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les otorgarán las siguientes prestaciones:

...
III.- Recibir en especie una despensa o ayuda económica por ese concepto;
...

¹ **Artículo 28.** Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Como se aprecia del primer artículo impreso indica que “se les otorgara” a los sujetos de la **LSEGSOCSPEN**, es decir una obligación de darles la Despensa y del segundo de los preceptos legales deviene que los elementos policiales tienen derecho a disfrutar de una despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

Por lo anterior se concluye que, el derecho a percibir la Despensa o Despensa Familiar es obligatorio su disfrute en activo, en consecuencia, debe ser integrada a su pensión, cuyo monto mensual nunca será menor a siete días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad, en términos del Decreto Número seiscientos veintisiete, artículo tercero, por medio del cual se le concedió su pensión la demandante.

Ahora se analizará si como lo afirmó la **parte actora** se le ha venido pagado de manera incompleta en su calidad de activa y como pensionada. Para tal efecto será necesario analizar los Comprobantes de pago a nombre de la actora como policía que obran en autos, porque de aquellos que se expidieron como pensionado no vienen desglosados los conceptos que integran el monto que se le cubre.

Así no remitimos a las pruebas que obran en autos, en particular a la previamente valorada consistente en:

LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas de ocho fojas pertenecientes al sistema de nómina de la Dirección General de Recursos Humanos



de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Morelos.²⁸

En donde constan las los siguientes Comprobantes de
pago a nombre de la justiciable en su cargo de **policía** y que
son los siguientes:

Primera quincena de enero de dos mil veinte, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Segunda quincena de enero de dos mil veinte, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

De lo cual se entiende que al mes por dicha prestación
se le cubrían [REDACTED] [REDACTED]
M.N.).

En el **año dos mil veinte** el salario mínimo en esta
Entidad fue de [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] los que multiplicados por 7, serían [REDACTED]
[REDACTED] \$ [REDACTED] [REDACTED]

De lo cual se concluye, que se pagó de más a la actora
la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

²⁸ Integradas en el anexo denominado Cuadernillo de Datos Personales.

Sin que con ello se vulnere la norma que regula el pago de Despensa o Despensa Familiar, por que señala que el monto mensual nunca será menor a siete días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad, entonces si es más es acorde, pues no indica un máximo.

La demandada adujo en su contestación:

Que las percepciones que obtenía la actora cuando estaba activa, arrojan un total mensual de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y que su pensión por [REDACTED] al ser decretada por el [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) de su último salario asciende a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con el aumento porcentual anual retroactivo del 9% (nueve por ciento), de lo que se colige que las prestaciones que alega la actora fueron consideradas en todos los conceptos que aparecen como percepciones en su comprobante de pago, con excepción del I.P. PATRÓN. Estableciendo que, en los comprobantes de pago aparecían las siguientes percepciones, de la cual se pone la imagen, para mejor ilustración:





Añadiendo que las percepciones quincenales de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] multiplicadas por dos daban un resultado de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mensual.

Es decir, hay una aceptación expresa de que en base a ese monto [REDACTED] [REDACTED] se le pagaba a la actora la prestación en controversia como pensionada.

Pero además, acepta expresamente que, hasta el dos mil veintitrés le está pagado a la actora la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], que corresponde al mismo monto del **dos mil veinte**, pues para llegar a ese resultado invoca los mismos conceptos y montos que amparan los recibos de **enero de dos mil veinte** en su calidad de policía activo.

Para los efectos procedentes, se establece que la fecha de baja de la actora como policía fue el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de conformidad a la siguiente prueba documental que consta en autos, previamente valorada:

LA DOCUMENTAL. – Consistente en copia certificadas de ciento treinta y cinco fojas pertenecientes al expediente personal de la demandante en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.²⁹

²⁹ Integradas en el anexo denominado Cuadernillo de Datos Personales.

En donde corren agregadas las siguientes pruebas en copia certificada:

Constancia de Servicios de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, con firma electrónica del Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Morelos, donde estableció como fecha de baja el [REDACTED].

Oficio número [REDACTED] de fecha [REDACTED] suscrito por Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado de Morelos, donde informó a la Directora General de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Contraloría que la fecha de baja de la demandante fue el [REDACTED].

Ahora bien, tocante al reclamo completo de la Despensa o Despensa Familiar, desde el dos mil quince y en su calidad de pensionada la demandada hizo valer la prescripción de la siguiente forma:³⁰

"En términos de los que establece el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 516 de la Ley Federal del Trabajo, se encuentran prescritas las pensiones que excedan el año inmediato anterior al mes del primer pago como pensionado de la parte actora que fue marzo de dos mil veintitrés." (Sic)

Excepción de la cual se desprende solo se hizo valer en contra de los pagos pensionatorio y no en contra de los

³⁰ Fojas 57 del expediente principal.



pagos como activa; pero además, al oponerla debió precisar, la acción o pretensión respecto de la cual se opone, el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, la temporalidad que tuvo para disfrutarla, la fecha en que prescribió esa prerrogativa, sin que hubiera agotado todos los puntos descritos; por ello resulta **inoperante** la prescripción que invocó; ello con apoyo en el siguiente criterio:

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. REQUISITOS PARA ESTIMAR QUE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LAS PRESTACIONES PERIÓDICAS DERIVADAS DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO DE GUANAJUATO, SE OPUSO ADECUADAMENTE.³¹

La excepción de prescripción de una obligación de pago no opera de manera oficiosa, sino rogada, por lo que compete al demandado hacerla valer. Esta última característica se acentúa aún más en la materia contenciosa administrativa, donde impera el principio de estricto derecho; aspecto que, de acuerdo con el artículo 280, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, obliga a la autoridad a formular su contestación, plasmando claramente las excepciones y defensas que estime pertinentes, a riesgo de que, en caso contrario, esto es,

³¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2014038, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: XVI.1o.A. J/34 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2486, Tipo: Jurisprudencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 58/2016. [REDACTED]. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.

Amparo directo 82/2016. [REDACTED]. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.

Amparo directo 599/2015. [REDACTED]. 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.

Amparo directo 301/2016. [REDACTED]. 1 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.

Amparo directo 661/2016. [REDACTED]. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de marzo de 2017 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de abril de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

ante su vaguedad o imprecisión, no sean analizadas. Por tanto, para estimar que la excepción de prescripción se opuso adecuadamente, respecto de las prestaciones periódicas derivadas de la relación administrativa entre los miembros de las instituciones de seguridad pública y dicha entidad federativa, **es necesario cumplir con los requisitos que permitan realizar el estudio correspondiente; esto es, la autoridad demandada debe precisar, en términos generales, la acción o pretensión respecto de la cual se opone, el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, la temporalidad que tuvo para disfrutarla, la fecha en que prescribió esa prerrogativa, así como el fundamento legal o reglamentario o, en su defecto, la circular, disposición administrativa o acuerdo del Ayuntamiento en que se contenga; elementos que, indudablemente, tenderán a demostrar que se ha extinguido el derecho del actor para exigir el pago de dichas prestaciones.**

(Lo resaltado no es origen)

Esta prestación como la pidió la demandante es procedente a partir del **primero de enero de dos mil quince**; ya que la **LSEGSOCSP** norma que la rige, determinó que entrarían en vigor en esa fecha, en términos de su artículo segundo transitorio³².

En la inteligencia que el pago de esta prestación deberá de ser a razón de siete salarios mínimos mensuales, como activa y pensionada, pues el precepto legal que la regula dispone que nunca será menor a esa cantidad.

Por lo anterior para dejar claras las cantidades a que tiene derecho la accionante por Despensa o Despensa Familiar, como activa y que debe integrarse en su carácter de pensionada, se elaboró la siguiente tabla por el periodo del

³² **SEGUNDO.** Las prestaciones contempladas en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 35, entrarán en vigencia a partir del primer día de enero del año 2015, debiendo realizarse las previsiones presupuestales correspondientes en el Presupuesto de Egresos, para dicho Ejercicio Fiscal.



[REDACTED]
[REDACTED], dejando a salvo los que se sigan generando:

[REDACTED]	MESES	DESPENSA FAMILIAR	SALARIO MINIMO	RESULTADO POR MES	SUMA POR PERIODO
[REDACTED]	1	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2026	[REDACTED]	7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL					[REDACTED]

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Resultado la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] de autos no se desprende la existencia de Comprobantes de pago actualizados de la **parte actora**; de ahí que se ignora el monto que se le ha venido cubriendo; por ello será en la etapa de ejecución que la demandada deberá demostrar los pagos efectuados por concepto de Despensa o Despensa Familiar hasta el mes de [REDACTED]

³³ Enero y febrero de 2026

██████; en el entendido que los pagos que por ese concepto se hayan hecho deberán restarse a la suma antes determinada. Dejándose a salvo las que se generan con posterioridad, conforme al porcentaje de la pensión otorgada

Por lo expuesto, se determina **ilegal** la omisión de la **autoridad demandada** de pagar Despensa o Despensa Familiar debidamente como activa y pensionada a la **parte actora**, declarándose su **nulidad**, para efectos de que dicho concepto sea cubierto correctamente y le sea integrado mensualmente a su pensión, en términos de lo disertado con anterioridad.

7.8.2 Ayuda para Transporte y/o Pasajes, Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional y Ayuda para Alimentos y/o Alimentación.

Los actos impugnados son:

II.- La omisión de pago de la prestación consistente en una compensación por riesgo del servicio, que conforme el artículo 29 de la **LSEGSOCSPEN**; como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

III.- La omisión de pago de la prestación consistente en ayuda para pasajes y/o transporte conforme el artículo de la **LSEGSOCSPEN**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez; y



IV.- La omisión de pago de la prestación consistente en ayuda para alimentación, que conforme el artículo 34 de la **LSEGSOCSPPEM**, como activa a partir de enero de dos mil quince y en su calidad de pensionada por invalidez.

Así tenemos que, los artículos 29, 31, y 34 segundo transitorio de la **LSEGSOCSPPEM** señalan:

Artículo 29. Se podrá conferir a los sujetos de la Ley una compensación por el riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

Artículo 31. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una ayuda para pasajes, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos.

Artículo 34. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos.

La **autoridad demandada** respondió que era improcedente dicha integración, porque ya estaba incluida en su pago aún y cuando no era obligatoria.

La actora al momento de desahogar la vista que se le dio de la demanda señaló que el monto que se le venía cubriendo era inferior al que marca la norma que regula dicha prestación.

Esta autoridad considera que es **fundado** el reclamo de la **parte actora**, como se explica a continuación:

La demandada aceptó que, en funciones se le daban estas prestaciones a la accionante y que en la Pensión

otorgada se le sigue proporcionando el pago por los conceptos que reclama, entonces existe una aceptación de que la actora tiene el derecho a percibir esas prestaciones.

Procediendo a analizar si como lo apuntó la **parte actora** se le ha venido pagado de manera incompleta como activa y en su calidad de pensionada. Para tal efecto será necesario analizar los Comprobantes de pago a nombre de la actora como policía en funciones, porque de aquellos que se expidieron como pensionado no vienen desglosados los conceptos que integran el monto que se le cubre.

Nos remitimos a las pruebas que obran en autos, en particular a la previamente valorada y que es la siguiente:

LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas de ocho fojas pertenecientes al sistema de nómina de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.³⁴

En donde constan los siguientes Comprobantes de pago a nombre de la justiciable en su cargo de [REDACTED] y que son los siguientes:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] en cada una se pagó a la demandante al siguiente tenor:

³⁴ Integradas en el anexo denominado Cuadernillo de Datos Personales.

Ayuda para Transporte [REDACTED]
[REDACTED]

Riesgos Profesionales y/o Compensación por
riesgo profesional [REDACTED]
[REDACTED]

Ayuda para Alimentos [REDACTED]
[REDACTED]

De lo cual se entiende que al mes se le cubría en
funciones de la siguiente forma:

Ayuda para Transporte y/o Pasajes [REDACTED]
[REDACTED]

Riesgos Profesionales y/o Compensación por
riesgo profesional [REDACTED]
[REDACTED]

Ayuda para Alimentos [REDACTED]
[REDACTED]

En el año dos mil veinte el salario mínimo en esta
Entidad fue de [REDACTED]
[REDACTED] procediendo a la elaboración de la siguiente
tabla, donde se podrá advertir si en dicha anualidad las
prestaciones reclamadas le fueron debidamente saldadas:

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

CONCEPTO	2020		Salario diario 2020	LO QUE SE DEBIÓ PAGAR
Ayuda para Transporte y/o Pasajes				
Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional				
Ayuda para Alimentos y/o Alimentación				

Como se puede visualizar de lo anterior en los conceptos de **Ayuda para Transporte y/o Pasajes** y **Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional**, se cubrió menor cantidad de la debida; en tanto en la prestación de **Ayuda para Alimentos y/o Alimentación**, se pagó de más.

La demandada adujo en su contestación:

Que las percepciones que obtenía la actora cuando estaba activa, arrojan un total mensual de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y que su pensión por invalidez al ser decretada por el [REDACTED] [REDACTED] de su último



salario asciende a [REDACTED] [REDACTED] con el aumento porcentual anual retroactivo del 9% (nueve por ciento), de lo que se colige que las prestaciones que alega la actora fueron consideradas en todos los conceptos que aparecen como percepciones en su comprobante de pago, con excepción del I.P. PATRÓN. Estableciendo que, en los comprobantes de pago aparecían las siguientes percepciones, de la cual se pone la imagen, para mejor ilustración:



Añadiendo que las percepciones quincenales de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] multiplicadas por dos daban un resultado de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mensual.

Es decir, acepta que sí pagó las prestaciones en controversia como activa y a últimas fechas si las cubrió como pensionada, con la aplicación de [REDACTED] que se le concedió a la actora como pensionada.

Pero además hay una confesión expresa de que, hasta el dos mil veintitrés le está pagado a la actora la cantidad de



entrarían en vigor en esa fecha, en términos de su artículo segundo transitorio³⁶.

Por lo anterior para dejar claras las cantidades a que tiene derecho la accionante se elaboraron la siguientes tablas, por el periodo del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] como activa, respecto a los conceptos de **Ayuda para Transporte y/o Pasajes y Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional y Ayuda para Alimentos y/o Alimentación**; esto es así porque al adquirir su calidad de pensionada por [REDACTED] le fue decretada su pensión al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de su último salario, al haberlo decretado así su Acuerdo de Pensión por [REDACTED]; por tanto en la etapa de ejecución la demandada deberá acreditar que se le está pagando de forma correcta los conceptos mencionados y a partir de ello se le paga el [REDACTED] de la pensión otorgada.

Resultan por el periodo como activa respecto la prestación de **Ayuda para Transporte y/o Pasajes**, la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] como se aprecia a continuación:

AYUDA PARA TRANSPORTE Y/O PASAJES EN FUNCIONES.	
A pagar: El monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario	

³⁶ **SEGUNDO.** Las prestaciones contempladas en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 35, entrarán en vigencia a partir del primer día de enero del año 2015, debiendo realizarse las previsiones presupuestales correspondientes en el Presupuesto de Egresos, para dicho Ejercicio Fiscal.

Mínimo General Vigente en Morelos				
AÑO	PERIODO	SALARIO MINIMO	RESULTADO POR MES	POR PERIODO
2011	2011-2012	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2012	2012-2013	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2013	2013-2014	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2014	2014-2015	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2015	2015-2016	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2016	2016-2017	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2017	2017-2018	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2018	2018-2019	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
2019	2019-2020	100	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00
TOTAL				100 000,00

Procediendo a calcular la prestación de **Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional**, como policía en funciones al siguiente tenor:

RIESGOS PROFESIONALES Y/O COMPENSACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL EN ACTIVO				
A pagar: Cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad				
AÑO	PERIODO	SALARIO MINIMO	RESULTADO POR MES	POR PERIODO
████	████	████	████████████████	████

A pagar: Cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad

37 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
38 [REDACTED] [REDACTED]



TOTAL				

Obteniendo como activa el saldo de

Respecto a la prestación denominada **Ayuda Para Alimentos y/o Alimentación** en funciones de policía, resultando

como se advierte a continuación:

AYUDA PARA ALIMENTOS Y/O ALIMENTACIÓN EN FUNCIONES DE POLICÍA.				
A pagar: El monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente en Morelos				
AÑO	PERIODO	SALARIO MINIMO	RESULTADO POR MES	POR PERIODO

39 De
40 De

[illegible]

De autos no se desprende la existencia de Comprobantes de pago actualizados como pensionada de la **parte actora**, de ahí que, se ignora el monto que se le ha venido cubriendo; por ello será en la etapa de ejecución que la demandada deberá demostrar que por cada uno de los conceptos de **Ayuda para Transporte y/o Pasajes, Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional y Ayuda para Alimentos y/o Alimentación** se le cubrieron los montos antes determinados en su calidad de policía activa y como pensionada con la aplicación del [REDACTED] (cuarenta por ciento establecido en el Decreto Pensionatorio de mérito. Dejándose a salvo las que se generan con posterioridad.

Al no haberse demostrado los pagos correspondientes, se determina **ilegal** la omisión de la **autoridad demandada** de pagar **Ayuda para Transporte y/o Pasajes, Riesgos**

⁴¹ De enero a julio de 2021

⁴² Del 1 al 5 de agosto de 2021.



Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional y Ayuda para Alimentos y/o Alimentación debidamente como activa y pensionada a la **parte actora**, declarándose su **nulidad**, para efectos de que dichos conceptos sean cubiertos correctamente y le sea integrado mensualmente a su pensión, en términos de lo disertado con anterioridad.

7.8.3 Pretensiones

La actora hizo valer las siguientes:

"1. Se declare la nulidad de la inaplicación del artículo 28 de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

2. Se condene a las demandadas al pago de 7 días de salario mínimo vigente por concepto de vales de despensa, dicha cantidad será lo multiplicado de [REDACTED] por 7 dando como total [REDACTED] de manera mensual y el cual será agregado a mi pensión.

3. Se ordene y condene a las demandadas a que se realice el pago de la prestación de vales de despensa de acuerdo a lo que incremente año tras año el salario mínimo.

4. Como consecuencia de lo anterior se me realice el pago de los vales de despensa desde el mes de enero de 2015 hasta que se dicte sentencia condenatoria y que las autoridades demandadas den cumplimiento a la misma, por lo que las autoridades demandadas adeudan al suscrito la cantidad de [REDACTED]

5. Se declare la nulidad de la inaplicación del artículo 29 de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Se condene a las autoridades demandadas a que se incremente a mi pensión, la prestación consistente en compensación por riesgo de trabajo, por la cantidad que resulte de tres días de salario mínimo vigente en la entidad.

7. Se condene a las autoridades demandadas a pagar de manera retroactiva la prestación de compensación por riesgo de trabajo, por la cantidad que resulte de tres días de salario mínimo vigente en la entidad, desde el mes de enero del año 2015 hasta que se dicte sentencia condenatoria y/o las autoridades demandadas den cumplimiento total al fallo que emita este tribunal, por lo que no se

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

podría hacer mención de cuanto es lo que se estaría demandando a las autoridades demandadas ya que dicho cálculo se debe de cuantificar hasta que den cabal cumplimiento a la sentencia que emita este H. Tribunal.

8. *Se incremente a mi pensión de manera definitiva, el pago de la prestación de ayuda para pasajes, por ser un Derecho Adquirido.*

9. *Se declare la nulidad de la inaplicación del artículo 31 de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.*

10. *Se condene a las autoridades demandadas a que se incremente a mi pensión, la prestación consistente en ayuda para pasajes, por la cantidad que resulte del diez por ciento de salario mínimo vigente en la entidad de manera diaria*

11. *Se condene a las autoridades demandadas a pagar de manera retroactiva la prestación de ayuda para pasajes, por la cantidad que resulte del diez por ciento de salario mínimo vigente en la entidad de manera diaria, desde el mes de enero del año 2015 y hasta que se dicte sentencia condenatoria y/o las autoridades demandadas den cumplimiento total al fallo que emita este tribunal, por lo que no se podría hacer mención de cuanto es lo que se estaría demandando a las autoridades demandadas ya que dicho cálculo se debe de cuantificar hasta que den cabal cumplimiento a la sentencia que emita este H. Tribunal.*

12. *Se incremente a mi pensión de manera definitiva, el pago de la prestación de ayuda para pasajes, por ser un Derecho Adquirido.*

13. *Se declare la nulidad de la Inaplicación del artículo 34 de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.*

14. *Se condene a las autoridades demandadas a que se incremente a mi pensión, la prestación consistente en ayuda para alimentación, por la cantidad que resulte del diez por ciento de salario mínimo vigente en la entidad de manera diaria*

15. *Se condene a las autoridades demandadas a pagar de manera retroactiva la prestación de ayuda para alimentación, por la cantidad que resulte del diez por ciento de salario mínimo vigente en la entidad de manera diaria, desde el mes de enero del año 2015 hasta que se dicte sentencia condenatoria y/o las autoridades demandadas den cumplimiento total al fallo que emita este tribunal, por lo que no se podría hacer mención de cuanto es lo que se estaría demandando a las autoridades demandadas ya que dicho cálculo se debe de cuantificar hasta que den cabal cumplimiento a la sentencia que emita este H. Tribunal.*

16. *Se incremente a mi pensión de manera definitiva, el pago de la prestación de ayuda para pasajes, por ser un Derecho Adquirido.” (Sic)*

Las que han sido atendidas como procedentes con sus modulaciones de conformidad a lo establecido en el capítulo que precede.

En las relatadas consideraciones, es **procedente** declarar la **nulidad lisa y llana** de los actos antes estudiados, al configurarse la causal que establece el artículo 4, en su fracción II⁴³ de la **LJUSTICIAADMVAEM**; por lo que se declara su ilegalidad.

7.8.4 Deducciones legales

La autoridad demandada tiene la posibilidad de aplicar las deducciones que procedan y que la ley les obligue hacer al momento de efectuar el pago de las prestaciones que resultaron procedentes; ello tiene apoyo en el siguiente criterio jurisprudencial aplicado por similitud:

DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO ESTÁ OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAUDO.⁴⁴

No constituye ilegalidad alguna la omisión en la que incurre la autoridad que conoce de un juicio laboral, al no establecer en el laudo las deducciones que por ley pudieran corresponder a las prestaciones respecto de las que decreta condena, en virtud de que no existe disposición legal que así se lo imponga, y como tales deducciones no quedan al arbitrio del juzgador, **sino derivan de la ley que en cada caso las establezca, la parte condenada está en posibilidad de**

⁴³ **Artículo 4.** Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. ...

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;

...
...

⁴⁴ Época: Novena Época; Registro: 197406; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VI, Noviembre de 1997; Materia(s): Laboral; Tesis: I.7o.T. J/16; Página: 346.

aplicar las que procedan al hacer el pago de las cantidades respecto de las que se decretó condena en su contra conforme a la ley o leyes aplicables, sin necesidad de que la autoridad responsable las señale o precise expresamente en su resolución.

(Lo resultado fue hecho por este Tribunal)

8. EFECTOS DEL FALLO

8.1 Son **fundadas** las razones de impugnación hechas valer por la actora.

8.2 Se declara la **ilegalidad, por ende, la nulidad** de la **omisión** del pago correcto de la autoridad demandada **Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos**, de las prestaciones consistentes en **Despensa o Despensa Familiar, Ayuda para Transporte y/o Pasajes, Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional y Ayuda para Alimentos y/o Alimentación.**

8.3 La autoridad demandada **Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos**, deberá comprobar en ejecución de sentencia, haber cubierto a la actora como activa el pago de forma completa los conceptos mencionados y que estos una vez integrados correctamente, se realiza el pago del [REDACTED] de la pensión otorgada conforme a los siguientes montos:

8.3.1 Ayuda para Transporte y/o Pasajes,



Como activa la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8.3.2 Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional,

Como [REDACTED] el saldo de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8.3.3 Ayuda Para Alimentos y/o Alimentación

En [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

En caso contrario proceder a su pago y respecto a su calidad de pensionada en los términos referidos en el cuerpo de la presente sentencia. Dejándose a salvo las que sigan generando hasta el cumplimiento de la sentencia.

8.4 Cumplimiento

Se concede a la autoridad responsable **Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos**, un término de **diez días hábiles** para que dé cumplimiento voluntario a lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause ejecutoria; apercibido que, de no hacerlo así, se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo

dispuesto por los artículos 90⁴⁵ y 91⁴⁶ de la **LJUSTICIAADVMAEMO**.

Al cumplimiento de esta sentencia están obligadas las autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en el presente juicio, por sus funciones deban intervenir en el cumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.⁴⁷

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones

⁴⁵ **Artículo 90.** Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliera con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley.

⁴⁶ **Artículo 91.** Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente:

I. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada;

II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley;

III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y

IV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública.

Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado la versión pública en la Página de Internet del Tribunal.

⁴⁷ Época: Novena Época; Registro: 172605; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 57/2007; Página: 144.

deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

La condena de las prestaciones que resultaron procedentes, se hace con la salvedad de que se tendrán por satisfechas, aquellas que dentro de la etapa de ejecución la autoridad demanda acredite con pruebas documentales fehacientes que en su momento fueron pagadas al actor.

Lo anterior, con la finalidad de respetar los principios de congruencia y buena fe guardada que debe imperar entre las partes, pues si la demandada aporta elementos que demuestren su cobertura anterior a las reclamaciones de la **parte actora**, debe tenerse por satisfecha la condena impuesta, pues de lo contrario se propiciaría un doble pago, lo que está prohibido por la ley.

Ello guarda congruencia con lo establecido en el artículo 715 del **CPROCIVILEM** de aplicación complementaria a la **LJUSTICIAADVMAEMO**, el cual en la parte que interesa establece:

ARTICULO 715.- Oposición contra la ejecución forzosa. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más defensa que la de pago...

El pago de las prestaciones a que fueron condenadas las demandadas, se deberá enterar la cantidad antes señalada por medio de transferencia a la Cuenta de Cheques BBVA Bancomer: [REDACTED] Clabe interbancaria BBVA Bancomer: [REDACTED] a nombre del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, RFC: [REDACTED] señalándose como concepto el número de expediente **TJA/5ªSERA/066/2025**; comprobante que deberá remitirse al correo electrónico oficial: fondoauxiliar.depositos@tjamorelos.gob.mx, y exhibirse ante la Sala del conocimiento de este Tribunal, con fundamento en lo establecido en el artículo 88 apartado B⁴⁸ del *Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*. Debiendo la parte actora exhibir su constancia de situación fiscal.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en los artículos 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18 inciso B fracción II sub inciso a) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO** 1, 3, 85 y 86 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, es de resolverse, al tenor siguiente.

9. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en capítulo cuatro de la presente resolución.

⁴⁸ **Artículo 88.** Además de los considerados en el artículo 44 de la Ley Orgánica, son recursos del Fondo Auxiliar los siguientes:

...
B. Recursos ajenos, constituidos por depósitos en efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario o en valores, que por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito correspondiente se realicen o se hayan realizado ante las Salas.



SEGUNDO. Son **fundados** los argumentos hechos valer por la **parte actora**.

TERCERO. Se declara la **ilegalidad** de las **omisiones** de la autoridad demandada **Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos**, de efectuar debidamente el pago de las prestaciones consistentes en **Despensa o Despensa Familiar, Ayuda para Transporte y/o Pasajes, Riesgos Profesionales y/o Compensación por riesgo profesional y Ayuda para Alimentos y/o Alimentación**; por ende, se declara su nulidad.

CUARTO. Se conmina a la autoridad **Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos**, en términos del apartado **8.3** a comprobar en ejecución de sentencia, las cantidades establecidas en el mismo.

QUINTO. Cumplimiento que deberá realizar la autoridad demandada en el plazo establecido en el apartado **9.7**.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

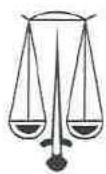
10.- NOTIFICACIONES

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, como legalmente corresponda.

11. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrada **MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrada **VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y ponente en el presente asunto; Magistrada **KARLA SOCORRO REYES REYES**, Titular de la Sexta Sala de Instrucción y Magistrada **CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR**, Titular de la Séptima Sala de Instrucción; en términos de la Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos* y de la *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; ante **ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.**



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/066/2025

MAGISTRADO PRESIDENTE

GUILLERMO ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA

MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO

TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA

VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

MANUEL GARCÍA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

MAGISTRADO

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO

**TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

MAGISTRADA

KARLA SOCORRO REYES REYES

TITULAR DE LA SEXTA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA

CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR

TITULAR DE LA SÉPTIMA SALA DE INSTRUCCIÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número **TJA/5ªSERA/066/2025**, promovido por [REDACTED] en contra del **DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**; misma que es aprobada en Pleno de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiséis. **CONSTE.**
AMRC